

Las falsas políticas de austeridad del gobierno mexicano

Luis Pazos

***E**n México, factores internacionales como la caída de los precios del petróleo y los altos intereses del crédito externo, se combinaron con problemas de manejo interno para desembocar en la aguda crisis económica de 1982. Exhortado por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno mexicano puso en marcha un estricto programa de austeridad. No obstante, sostiene el autor del presente ensayo, las fuertes medidas gubernamentales han sido tan solo una solución aparente, pues no han sido diseñadas para corregir las causas más profundas del trastorno económico. La austeridad habría recaído sobre la industria, el comercio y el consumo de las clases menos favorecidas, en tanto que el sector público sigue creciendo. Los excedentes extraídos a costa del sacrificio nacional financian gastos públicos y deudas en lugar de auspiciar inversiones productivas, obstaculizando así el crecimiento económico.*

* * *

EN MÉXICO, COMO EN MUCHOS OTROS PAÍSES IBEROAMERICANOS, teóricamente se han adoptado políticas de austeridad en el gasto público, en gran parte debido a las recomendaciones y compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno mexicano maneja cifras donde muestra reducciones en el déficit presupuestal, superávit en la balanza comercial y una tendencia descendente en la inflación. Pero las llamadas políticas de austeridad del gobierno mexicano son superficiales y las correcciones logradas son transitorias, teniendo como principal objetivo cumplir formalmente con los compromisos contraídos con el FMI y no lograr rectificaciones duraderas.

Para entender el por qué de lo inoperante y transitorio de las correcciones del gobierno mexicano y el futuro de nuestra economía es necesario analizar los antecedentes de la crisis.

Al comienzo de la década de los setenta se empieza a manifestar un nuevo problema en México: la inflación. Dicho problema es consecuencia de políticas nekeynesianas que buscan incentivar el crecimiento económico a través de un mayor gasto público sustentado en emisiones de dinero. De esta manera se producen auges artificiales —caracterizados por altas tasas de crecimiento económico en 1973, 1974 y parte de 1975— que culminan en crisis en 1976. Esa crisis hizo necesaria la intervención del Fondo Monetario Internacional y la devaluación de la moneda en casi sesenta por ciento.

I TRIMESTRE 1987

En 1977 el gobierno inició un nuevo programa económico supeditado a un convenio con el FMI que lo obligaba a moderar el gasto y el déficit gubernamental. Estas medidas permitieron frenar la inflación en 1977 y parte de 1978. Pero ante el alto precio del petróleo, que aumentó el valor de las exportaciones, en 1978 el gobierno de México nuevamente fue sujeto de crédito por la banca privada internacional y pagó por adelantado al FMI, liberándose así de la obligación de corregir los desequilibrios.

A partir de ese momento se aplicaron nuevamente políticas de gasto público expansivo y se mantuvo un tipo de cambio casi fijo con el dólar, sin reconocer la disparidad entre las tasas de inflación de México y Estados Unidos. En gran parte la excesiva deuda externa contraída en 1980, 1981 y principios de 1982, es resultado de esta equivocada política de cambio. En 1981, México tuvo un ingreso récord de divisas por exportaciones de petróleo. Sin embargo, pidió créditos al extranjero por más de 19 mil millones de dólares. Esos préstamos no fueron utilizados en nuevas inversiones, sino en sostener un peso mexicano sobrevaluado en cerca de cincuenta por ciento.

El período 1979 a 1981 se caracteriza por un gran crecimiento económico y la creación de cientos de miles de empleos, sustentados en grandes emisiones de circulante para aumentar el gasto y la inversión pública, con lo que a la vez se estimulaba la inversión privada. Consecuentemente, el gasto público, que en 1970 significó 26% del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó 35% en 1976 y en 1982 llegó a más de cincuenta por ciento.

Al igual que en 1976, estos crecimientos artificiales desembocan en una crisis en 1982 caracterizada por una tasa de inflación de 100%, un bajo crecimiento económico y un desempleo que contrarresta todos los empleos creados anteriormente a través de un proceso inflacionario, y un alza en el tipo de cambio que, de 26 pesos por dólar en diciembre de 1981, pasa a 148 pesos por dólar un año más tarde.

Junto con las políticas de tipo de cambio ficticio y expansivo gasto público, también se consolida en la economía una tendencia al estatismo caracterizada por un rápido aumento en el número de empresas estatales. En 1970 había 86 empresas y organismos estatales; en 1976 ya eran 783 y en 1982 terminaron sumando más de mil. Coincidentemente, ocurre un marcado aumento en la burocracia mexicana. Aunque la población creció en sólo 25% entre 1975 y 1983, la burocracia, el gobierno y las empresas estatales aumentaron en 85%.

Algunos funcionarios públicos atribuyen la crisis a factores fuera del control del gobierno mexicano. La fuga de capitales, la baja internacional del precio del petróleo y los altos intereses de los créditos externos, fueron factores que agravaron la crisis interna, mas no la provocaron.

La crisis de México ha sido provocada por un crecimiento desproporcionado de la burocracia y del aparato gubernamental, el cual ha obedecido a criterios políticos socialistas que adjudicaron nuevas tareas al sector público y limitaron gradualmente al sector privado. En 1982 el gobierno mexicano, sin declararse formalmente socialista, puso en práctica casi todos los puntos de los programas de los partidos comunistas y socialistas de México. La estatización de la banca y del transporte, tanto urbano como aéreo,

la sindicalización de los bancos y el control de cambio eran peticiones de los partidos comunistas mexicanos. Las políticas socialistas del gobierno, junto con la inflación y la devaluación de la moneda, provocaron una fuga de capitales que hizo más crítica la situación en México.

Fue ante esa situación y comprometido nuevamente con el Fondo Monetario Internacional a corregir los desequilibrios del sector externo y de las finanzas públicas, que el nuevo gobierno tomó posesión en 1982. Durante el primer año (1983), de acuerdo con las recomendaciones del FMI, el gobierno empezó a corregir algunos desajustes de las finanzas públicas y del sector externo, con lo cual logró reducir el déficit del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto, de casi dieciocho por ciento en 1982, a 8,3% en 1983 y 7,4% en 1984. En 1983 y 1984, se obtiene un superávit en la balanza comercial y la inflación reduce su crecimiento de 100% en 1982 a 60% en 1984. Sin embargo, esas cifras no reflejan una verdadera austeridad en las finanzas públicas, sino en la industria, el comercio y el consumo privado.

Las correcciones alcanzadas por el gobierno en 1983 y 1984 tienden a cumplir con el FMI y no a corregir verdaderamente los desajustes internos derivados del excesivo gasto público. Esto ocurre porque el FMI compromete a los países subdesarrollados a una reducción del déficit presupuestal sin tomar en consideración que éste se puede reducir aumentando los impuestos e ingresos y sin disminuir los gastos.

En México, como en muchos otros países latinoamericanos, se optó por reducir los déficit presupuestales aumentando los impuestos, las tarifas y los precios de los servicios que presta el sector público, sin reducir el tamaño del gobierno. En otras palabras, no se combate el problema fundamental de nuestras economías, que es el excesivo tamaño del sector público. Más bien se traslada el costo de la reducción del déficit presupuestal a la población vía mayores impuestos y precios de bienes y servicios gubernamentales. En 1983, año en que teóricamente hubo una mayor austeridad presupuestal, se creó una nueva Secretaría, 10 nuevas Subsecretarías y 28 Direcciones Generales más. En un solo año el actual gobierno creó más dependencias que las creadas en seis años por el anterior. En 1983, la burocracia no disminuyó, sino que creció en 281.000 burócratas más. Los sueldos de los secretarios, subsecretarios, directores y secretarios particulares en 1983 y 1984, aumentaron dos y tres veces por encima del alza de precios, mientras que los de la baja burocracia y los salarios de los trabajadores aumentaron por debajo de la inflación.

El crecimiento del sector público fue posible a la vez que se reducía el déficit presupuestal, gracias a los aumentos de los impuestos y de los precios de la gasolina, la luz, el teléfono y otros servicios que presta el gobierno. El gobierno mexicano elevó el impuesto al consumo a 15%, más del doble que en los Estados Unidos. Aunque la recaudación fiscal en México es baja en relación al Producto Interno Bruto debido a los altos impuestos que incentivan la evasión fiscal y frenan la reinversión, tenemos uno de los niveles impositivos más altos del mundo y desde luego mayor que el de Estados Unidos.

Las recetas del Fondo Monetario Internacional, aunque en general son correctas, dan cabida a la instrumentación de políticas, como los aumentos

de impuestos, que obstaculizan el crecimiento económico de los países y consolidan el estatismo. Al mismo tiempo, el gobierno adoptó medidas financieras contraproducentes. A pesar de los aumentos de impuestos, los instrumentos para financiar el déficit presupuestal, como son la emisión de dinero, los bonos gubernamentales y el financiamiento del gobierno por la banca comercial, crecieron a niveles récord en 1984 y en los primeros meses de 1985. En diciembre de 1984 la emisión de dinero (M1) creció 63% sobre el mismo período del año anterior. Ese nivel de incremento de circulante es mayor al de 1982, año en que estalló la crisis.

La banca, ahora monopolizada por el Estado, ha dejado de cumplir su función de intermediaria entre el ahorro y las unidades productivas para convertirse fundamentalmente en un medio de financiamiento del gobierno. En 1984 más de sesenta por ciento de los recursos captados por el sistema bancario fueron utilizados para financiar gastos corrientes y deudas del sector público y no en inversiones productivas. Los bonos en circulación de la Tesorería se han duplicado en el último año. El pago de la deuda interna significó más de treinta y ocho por ciento del gasto público total en 1984. Y si a esto le sumamos el pago de amortización e intereses de la deuda externa, cerca del cuarenta y cinco por ciento del presupuesto del sector público es para pagar las deudas.

Aunque ante el Fondo Monetario Internacional y en varios medios financieros aparezca México como un ejemplo, el gobierno no lleva a cabo un verdadero programa de reordenación económica y en ningún momento ha disminuido verdaderamente el tamaño del sector público. Muchos de los datos que presenta ante el Fondo Monetario Internacional están acomodados para dar una impresión diferente a la realidad mexicana. La prueba es que el financiamiento del sector público sigue requiriendo fuertes emisiones de circulante que nos aseguran niveles de inflación muy por encima de los estimados por los organismos internacionales y el gobierno mexicano.

La deuda externa se ha renegociado a mayores plazos, pero sigue creciendo. En los dos primeros años del actual gobierno (1983-1984) la deuda externa se incrementó en 10,5 millones de dólares. Si a todo esto agregamos que la mayor parte del ahorro de los mexicanos, depositado en la ahora banca estatizada, se utiliza para financiar el gasto público y no en inversiones productivas, es muy difícil pensar en una verdadera recuperación económica.

Por otro lado, las políticas del actual gobierno agravan la crisis económica y alejan las expectativas de una recuperación, ya que entre la mayoría de los empresarios de México existe un desaliento por la clara tendencia al estatismo y la socialización económica bajo planes estatales.

El presente gobierno legalizó la inconstitucional, arbitraria e impopular estatización de la banca. Muchos esperábamos que rectificara la situación devolviendo la banca al sector privado, pero lejos de hacerlo, incorporó a nivel constitucional el monopolio de la banca por el gobierno. Además, elevó a nivel constitucional la planificación estatal, que es el principal elemento de una economía socialista. También introdujo en la Constitución mexicana el Artículo 25, uno de cuyos párrafos fue copiado casi textualmente de la Constitución cubana y en el cual se dan poderes casi ilimitados al gobierno para intervenir en todas las actividades económicas privadas.

Si analizamos el «Plan Nacional de Desarrollo», documento donde se plasman los programas gubernamentales, vemos que las políticas económicas del actual gobierno son más socialistas que las de Felipe González en España o las de François Mitterrand en Francia. Todos esos hechos han creado incertidumbre y descontento entre los empresarios, quienes ven en este gobierno una continuación de los dos anteriores.

Las recientemente anunciadas ventas de algunas empresas paraestatales no constituyen ningún cambio fundamental en las tendencias estatistas por su escaso peso en las finanzas públicas. Además, muchas de esas empresas serán vendidas al llamado sector social, nombre que designa a las empresas manejadas por los sindicatos obreros.

En conclusión, las relativas correcciones logradas por el gobierno mexicano durante 1983 y 1984 en cuanto al ordenamiento de las finanzas públicas, se han basado, fundamentalmente, en una mayor presión impositiva que ha empobrecido a los obreros, cuyos salarios han aumentado a menor ritmo que la inflación. Los aumentos de impuestos y la inflación han contribuido a descapitalizar a las empresas cuyas utilidades han bajado en términos reales.

La crisis en México no es sólo económica sino también política. Las correcciones económicas están supeditadas a un cambio político, pues el grupo en el poder no tiene ningún límite. El poder legislativo y el judicial están controlados casi en su totalidad por el poder ejecutivo: realmente no existe un balance o división de poderes en México. La Constitución es violada o cambiada al antojo del gobernante de turno. En Estados Unidos, en casi 200 años de vigencia, la Constitución ha sufrido 26 modificaciones. En México, en 68 años de vigencia, la actual Constitución ha tenido 316 cambios. Tan solo en los dos primeros años del actual gobierno sufrió 33 modificaciones, más que en 200 años en Estados Unidos. Y lo más grave es que la mayoría de esos cambios crean mayor incertidumbre sobre los derechos de propiedad y la libertad de los ciudadanos y dan cada día más poder al gobierno. Bajo el actual sistema económico, jurídico y político no se vislumbra una recuperación sólida y duradera, pues además de no existir una verdadera austeridad en las finanzas públicas, no hay un marco jurídico y político adecuado para propiciar una recuperación económica y social permanente.

México es un país rico, con recursos naturales y humanos suficientes para pagar su deuda externa, frenar la inflación y el desempleo y salir del subdesarrollo. Sin embargo, para lograr eso es necesario un cambio de dirección en las políticas económicas que hasta ahora se han aplicado. Si en México se abrieran las puertas al capital extranjero, se regresara la banca a los particulares, se garantizara la propiedad privada en el campo, se redujeran los impuestos y se modificara la Constitución en tal forma que quedaran perfectamente garantizadas la propiedad y la libertad en el ámbito económico, en unos cuantos años, sin necesidad de esperar remotos aumentos de precios del petróleo o andar mendigando mayores plazos para la deuda externa, podríamos llegar a ser una potencia. Pero esas modificaciones económicas implican el abandono de una tendencia estatista socializante en la economía.

El futuro económico de México está ligado a un cambio en el sistema político. Si éste evoluciona hacia la democracia y libre empresa, es posible superar nuestros problemas económicos. Si se consolida la tendencia a la planificación central, el estatismo y la dictadura de partido, ningún programa del Fondo Monetario Internacional ni renegociación de la deuda o ayuda del exterior podrán solucionar nuestros problemas.

“... Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando están en lo correcto como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. Ciertamente, son estas ideas las que rigen el mundo. Los hombres prácticos, que se creen inmunes a las influencias intelectuales, son, por lo general, esclavos de algún economista difunto.

... Tarde o temprano, son las ideas, no los intereses creados, las que resultan peligrosas, para bien o para mal”.

J. M. Keynes (1936)